

**LAS MUJERES
VÍCTIMAS DE
DESPLAZAMIENTO
FORZADO:
VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS**



Corporación Casa de la Mujer



Con el apoyo de la Unión Europea

Bogotá - Colombia - 2006

Equipo del proyecto:
Clara Elena Cardona Tamaño
Liliana Silva Miguez
Myriam Stella Pérez Gallo
Olga Amparo Sánchez Gómez
Osana Medina Bonilla

INDICE

Páginas

Introducción

11

I. Información básica

19

II. Aspectos anteriores al desplazamiento

23

III. Aspectos posteriores al desplazamiento

39

IV. Atención y asesoría institucional recibida frente al desplazamiento


55

V. Impacto del desplazamiento en la situación de las mujeres

61

Pies de página

67



INTRODUCCIÓN

El reconocimiento del impacto diferenciado en la vida de mujeres y varones, es un logro derivado del accionar político de grupos y organizaciones de mujeres que como la Casa de la Mujer, han venido trabajando esta problemática desde una visión feminista de los derechos humanos. Los esfuerzos por este reconocimiento, han sido agenciados también por algunas organizaciones de carácter internacional bien de la cooperación al desarrollo o del sistema de Naciones Unidas que han contribuido a evidenciar que las desigualdades derivadas de las relaciones de subordinación y opresión entre varones y mujeres, menoscaban el bienestar integral de las mujeres -en las diversas etapas de su vida- y de los grupos sociales. Ahora bien, aunque este reconocimiento ha ganado un terreno importante, pocas veces se logran precisar los aspectos específicos que se han modificado con la vivencia del desplazamiento, tanto para la vida de las mujeres como para el ejercicio de sus derechos y los de sus grupos familiares y comunitarios.

Es por esta razón que, en el marco del proyecto “Reconocimiento y exigibilidad de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento forzado en Bogotá” apoyado por la Delegación de la Comisión Europea como parte de los Microproyectos de Derechos Humanos y Democracia en Colombia, se aplicó la encuesta denominada, Derechos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Bogotá.

Esta encuesta, busca dar respuesta, parcial, a la ausencia de información y conocimientos más precisos sobre las repercusiones del desplazamiento forzado por conflicto armado en la vida y en los derechos de las mujeres, específicamente aquellas que se encuentran en situación de desarraigo en la ciudad de Bogotá; fue aplicada a treinta mujeres –de un total de 231-, participantes del proyecto ejecutado por la Corporación Casa de la Mujer, con miras al fortalecimiento de su autonomía, sus procesos organizativos y su capacidad de gestión para el reconocimiento y la exigibilidad de sus derechos.

La encuesta recoge datos básicos relacionados con la experiencia del desplazamiento de tal manera que, se indagó por las percepciones y por las vivencias de las mujeres en relación con el o los procesos de transición entre territorios, la toma de decisiones, la información sobre derechos, el acceso a servicios y a recursos, así como por el tipo de respuestas obtenidas o no, por parte del estado o de organizaciones no gubernamentales del orden nacional o internacional. Se recogió también información referida al ejercicio del liderazgo y la participación social y política por parte de las mujeres, así como sobre la utilización de mecanismos de exigibilidad de derechos.

Las mujeres que respondieron la encuesta, son víctimas del desplazamiento forzado, entre los 31 y los 50 años de edad, en su mayoría originarias de los departamentos de Tolima y Cundinamarca. Son mujeres que se vieron obligadas a desplazarse -con sus grupos familiares-, prioritariamente de los departamentos del Tolima, Meta y Caldas; en su mayoría, por amenazas proferidas contra sus hijos/as y esposos o compañeros por el no pago de “vacunas”; por posible reclutamiento -por parte de la guerrilla en el 63% de estos dos casos- o bien por enfrentamientos entre grupos armados o, por el asesinato de familiares.

Como si la vivencia de un solo desarraigo no fuera suficiente, el 50 por ciento de las mujeres encuestadas manifiesta haber tenido que enfrentar junto con sus familias más de un desplazamiento previo. A esto se suma además el hecho de que a su llegada a Bogotá, ocurrida hace entre 0 y 4 años -70%- o mas de 4 y hasta 8 -porcentaje restante-; la mitad de ellas ha tenido que cambiar de lugar de residencia entre 2 y 5 veces durante el mismo periodo.

Es importante recordar que su “inserción” a centros urbanos tan complejos como Bogotá, se da en condiciones de desconocimiento del espacio territorial, de sus dinámicas sociales, culturales e institucionales y de estigmatización y rechazo por parte de las poblaciones denominadas receptoras. Estas circunstancias deben enfrentarlas en la mayoría de los casos, sin educación formal avanzada -66.7% no supera la primaria completa-, y sin capacitación laboral acorde con empleos o trabajos productivos propios de zonas urbanas.

Aunque no se indagó por la jefatura femenina como un aspecto específico, las mujeres, con 5.3 hijos/as por hogar -por encima del promedio detectado con la encuesta de salud sexual y reproductiva en zonas marginales de Profamilia-¹ deben encargarse de buena parte de la búsqueda de bienestar y supervivencia en las más difíciles condiciones de escasez de recursos económicos, de inseguridad alimentaria y de inserción laboral.

Así, por ejemplo es evidente la dramática disminución del ingreso familiar producto del desplazamiento. Esto es que, si con anterioridad al mismo un porcentaje significativamente alto - 43% de las familias- percibía menos de \$400.000 mensuales, este porcentaje prácticamente se duplicó -87%- con posterioridad al hecho del desplazamiento. A esto se suma la obligatoriedad del pago por concepto de arriendo, hecho que no solo precariza aun más las condiciones socioeconómicas familiares sino que devela la pérdida de la propiedad de la vivienda para el 95% del total de las encuestadas. Este dato que indica que el número de arrendatarias aumentó casi siete veces, es uno de los aspectos percibidos por la mayoría de las mujeres como uno de los principales factores de inestabilidad familiar, incluso por encima del desempleo.

Se dio también un cambio drástico tanto en el tipo de actividades productivas desempeñadas por el grupo familiar para la consecución del ingreso; como en el papel desempeñado por las mujeres y lo hijos en la consecución del mismo. Es decir, la agricultura y las actividades afines desempeñadas con anterioridad al desplazamiento se ven desplazadas por actividades que nada tiene que ver con los oficios y las habilidades aprendidas por hombres y mujeres originarios de zonas rurales; esto,

con excepción del trabajo doméstico que pasa de ser una labor no remunerada desempeñada por las mujeres antes del desplazamiento, a una de sus principales “opciones” de trabajo; lo que no significa condiciones de estabilidad para ellas en términos de permanencia, ni de seguridad en el sentido de la protección social individual ni familiar y menos aun, representa transformaciones en los roles social y tradicionalmente asignados a las mujeres.

Cabe señalar además, una notable reducción del porcentaje de mujeres que contaba con ingresos propios antes del desplazamiento –del 67% al 20%- y una disminución aproximada en el nivel del mismo en un 47%. El número de mujeres sin ingresos propios se duplicó de 23% a 50%.² Como alternativa a esta situación, los hijos e hijas han entrado bien a compartir o a suplir esta responsabilidad – pasando de participar como proveedores de un 3% a un 30% de los casos-, que antes del desplazamiento recaía primordialmente en la pareja o en las mujeres. En estas últimas, también la responsabilidad pasó de ser del 17 al 27%.

Como producto de todas estas situaciones y de sus propias historias, la mayoría de estas mujeres como la casi totalidad de las vinculadas al proyecto, no se reconocía a si mismas, ni se sentían reconocidas como sujetas de derechos, razón por la cual han debido enfrentar también la violencia que en todas su formas se ejerce contra ellas tanto en los espacios públicos como privados; además de múltiples situaciones de exclusión, discriminación y explotación por las que no se logró en esta ocasión indagar suficientemente mas allá de la información general recabada durante el proceso de formación y asesoría.

En orden de mayor mención, los derechos que las mujeres consideraron más vulnerados con el desplazamiento fueron: la vivienda, el trabajo, la libertad y la salud. Mismos que al momento de la encuesta el 57 % de las participantes no consideraban restituidos. La proporción restante considera restituido sólo uno o dos de los derechos mencionados, a los que se suma el derecho a la integridad personal.

En cuanto a derechos específicos, los datos indican que el desplazamiento no impactó negativamente la educación de las hijas y los hijos, más allá del porcentaje que previamente no tuviera acceso a educación antes del desplazamiento, por razones económicas o, por falta de oportunidades, según lo indican las mujeres.

El hecho de no encontrar transformaciones negativas significativas en materia de educación, no explica de todos modos la razón por la cual tampoco se evidencia una mejora en este aspecto, mas aun, teniendo en cuenta que llegar a una ciudad como Bogotá mejor provista de infraestructura y calidad educativa; debería representar mayores y mejores oportunidades de acceso y calidad de educación, en contraste con las que se tenían en zonas rurales por lo general, con mayores deficiencias en este sentido. Por su parte, a diferencia de las niñas, niños y jóvenes, las mujeres que han visto aumentada su participación en procesos o actividades educativas, dentro de las que se menciona especialmente el proceso en el que se enmarca la aplicación y análisis de resultados de esta encuesta.

Otros derechos sobre los que se percibe una mejora importante son, el acceso a servicios públicos y afiliación en salud, lo que no significa sin embargo en este último caso, que no se enfrenten problemas relacionados con el acceso a la atención efectiva, a servicios especializados o de mayor nivel de complejidad o el suministro de medicamentos. Tanto las gestiones relacionadas con la búsqueda de acceso a educación, a salud, a servicios públicos e inscripción al Sistema Único de Registro –SUR– son asumidas en su mayoría por las mujeres de tal manera que, con posterioridad al desplazamiento, no sólo se ha incrementado su participación en la percepción de ingresos familiares o en la gestión de acceso a servicios y derechos sino, también en términos de la participación social y comunitaria. Esto último no ha implicado por sí sólo sin embargo, un mayor reconocimiento de sus necesidades, intereses y potencialidades al interior de los grupos u organizaciones en los que participan y menos aun de las comunidades a las que intentan pertenecer y a las cuales en muchos casos, consideran más pertinente presentarse sin hacer evidente su situación de desarraigo.

Debe considerarse que un mayor ejercicio de liderazgo y de participación si representa en cambio, el incremento de sus posibilidades de tejer redes sociales de apoyo y con ello de potenciar sus demandas de restitución de derechos y de mejoramiento de su calidad de vida individual, familiar y comunitaria.

Otro aspecto en el que se destacan cambios a favor de las mujeres está relacionado con el incremento de su participación en la toma de decisiones en las relaciones de pareja y familiares. Ya que no se profundizó por ahora en este aspecto, este dato no indica o niega, que este cambio se deba a un mayor reconocimiento de la autonomía de las mujeres por parte de sus cónyuges, hijos o hijas con quienes primordialmente conviven; sin embargo mayor participación en la toma de decisiones, también representa la posibilidad de potenciar su autonomía y sus capacidades de incidir o influir en las decisiones que las involucran y las afectan.

Finalmente, la falta de información y de claridad frente a la complejidad de los trámites y de los requisitos ante las instituciones a las que demandan atención, son algunas de las principales razones por las cuales un 17% de las participantes o la totalidad de los integrantes de su núcleo familiar, no se encontraban inscritas/os en el SUR al momento de la encuesta. Son las razones también mediante las cuales explican porque no se acude a otras instancias del Sistema Nacional de Atención de Población Desplazada, en la misma proporción que lo hacen a la Red de solidaridad -hoy Acción Social- Instituciones no gubernamentales a las que acuden con cierta frecuencia son: Cruz Roja, Opción Vida, Visión Mundial, Médicos sin Fronteras y ACNUR entre otras.

De las instancias que han percibido algún tipo de respuesta –especialmente atención humanitaria: alimentos, bonos, implementos de aseo y de cocina– son: Acción Social, seguida por un amplio margen por ICBF, Cruz Roja, Fonvivienda, SENA, Defensoría del Pueblo y Procuraduría general de la Nación en orden de mención. Albergue, atención médica, proyectos productivos y vestuario son las respuestas menos recibidas, en tanto que las instancias que les resultan más desconocidas son, la Consejería Presidencial para la Mujer, FINAGRO y Bancoldex -o INCODER-. También las de menor respuesta son según las mujeres, las alcaldías municipales, Opción Vida y Visión Mundial.

Es evidente aquí que las respuestas institucionales poco tienen que ver con el acceso a servicios, recursos o con la restitución de derechos que son entre otros, los que darían lugar a la estabilización socioeconómica de estos grupos de población.

En definitiva la información que se desglosa en adelante, permite precisar como se señalara inicialmente, aspectos relacionados con las condiciones que enfrentan las mujeres en tanto víctimas del conflicto armado interno en Colombia y particularmente del desplazamiento y el desarraigo. Muchos de los datos aportados por las mujeres permiten corroborar lo que a veces logra decirse sobre los efectos diferenciales derivados de estas problemáticas y otras, contribuyen a develar aspectos sobre los que aun no se ha indagado suficientemente.

Este documento, pretende ser un avance en este sentido. Un producto que convoca a profundizar en un tema que antes de que se lograra comprender suficientemente fue excluido –por no decir que nunca fue incorporado- de las políticas y los programas nacionales, departamentales y municipales de atención al desplazamiento. En muchos casos, porque precisamente la información con la que se cuenta sobre perspectiva de género o derechos de las mujeres es insuficiente y en otros, porque genera resistencias una veces manifiestas otras latentes.

De cualquier modo, lo que aquí se presenta son respuestas a preguntas que derivan en nuevos interrogantes. ¿Qué otras cosas no dicen los datos presentados, que puedan ser analizados desde otra perspectiva? ¿Cuál de esta información es pertinente precisar o profundizar? ¿Qué de ella arroja luces o indica horizontes que permitan pensar formas distintas de enfrentar la problemática del desplazamiento, y que sobre todo no pasen por alto estas y otras diferencias igualmente pertinentes?

Como producto concreto, este documento se reitera como una invitación bien a fortalecer los esfuerzos que se vienen agenciando o, bien a romper o enfrentar indiferencias o resistencias de temas que como la perspectiva de género y la promoción de la igualdad de derechos para las mujeres aun no son suficientemente aceptados o comprendidos. Y es por supuesto, un documento para devolverle a las mujeres que lo alimentaron, otra razón más para seguir construyéndose a sí mismas, individualmente y como colectivo.

Hay aquellas mujeres cuya voz disminuye como una llama, casi no habla, pero avanza y se va acercando cada vez mas a los secretos de las cosas, decrece hasta tocar la tierra, se tiende, roza con la mano el suelo imperceptiblemente tembloroso, escucha la música de la tierra; hay aquellas mujeres cuya voz percibe los signos de la vida en sus mínimos comienzos”

Hélène Cixous.

